


Ruiz-Healy Times
Eduardo Ruiz-Healy

@ruizhealy

Rosarito, epicentro del nuevo escándalo morenista ligado a Los Mayos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó ayer un nuevo golpe contra redes criminales mexicanas al sancionar a siete individuos y 15 empresas ligadas a "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. El golpe no solo exhibe tráfico de fentanilo, metanfetaminas y lavado de dinero en Playas de Rosarito, Baja California, también coloca en el centro del escándalo a Morena. Entre los sancionados está **Hilda Araceli Brown Figueredo**, diputada federal y alcaldesa de Rosarito (octubre de 2019 a agosto de 2024), acusada de ser intermediaria del cártel, recolectando extorsiones y asegurando protección policial.

La lista incluye a **Jesús González Lomeli**, empresario que supuestamente lava millones mediante bares y restaurantes como el Bombay Beach Club; **Juan José el Ruso Ponce Félix**, líder de "Los Mayos" en Baja California; **Candelario el Cande Arcega Aguirre**, operador político de Brown Figueredo; **Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez**, miembros del cártel; y **Carlos Alberto Páez Pereda**, jefe de la pandilla "Los Rugrats". Las empresas señaladas, casi todas en Rosarito, aparentemente sirven de fachadas. Y no es menor que la actual presidenta municipal, **Alejandra Padilla Orozco**, exdirectora de Gobierno y del DIF municipal en el gobierno de Brown, haya sido designada por ésta cuando pidió licencia para ocupar la diputación federal.

Estas sanciones se suman al retiro de visas a la gobernadora morenista **Marina del Pilar Ávila Olmeda** y a su esposo, **Carlos Torres Torres**. Aunque sin explicaciones oficiales, pueden deberse a presuntos nexos criminales o irregularidades financieras. Revocación de visas primero y sanciones después difícilmente parecen casualidad, sobre todo en un estado convertido en corredor clave del fentanilo y escenario de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La presidenta **Claudia Sheinbaum**, en su conferencia de prensa de ayer, evitó mencionar el caso, prefiriendo hablar de la llegada a México desde Paraguay del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante los gobiernos de **Adán Augusto López y Carlos Merino**. Ella suele exigir pruebas cuando de sanciones internacionales se trata. Callar en el caso de Brown despierta dudas: ¿está otorgándole protección política o calculando cómo medir los daños políticos?

Las repercusiones para Morena en Baja California son inmediatas. En un estado que gobierna desde 2019, estos escándalos erosionan su discurso de anticorrupción y transformación. La inseguridad y el retiro de su visa ya golpeó la aprobación de Ávila Olmeda, con una caída de 19 puntos desde abril pasado, de 69.4% a 50.2% en agosto, según la Encuesta Mx. En Rosarito, epicentro de las sanciones, la infiltración del cártel en el gobierno local anticipa crisis política y social.

El golpe no solo afecta a Morena en Baja California: pone en entredicho su credibilidad nacional. La presidenta Sheinbaum enfrenta un dilema: actuar con transparencia mediante investigaciones de la FGR y la UIF, o permitir que EU siga exhibiendo lo que su partido se niega a limpiar.

Al final, las sanciones no son solo un castigo al narco. Son un recordatorio de que la política mexicana no vive aislada. Morena debe decidir entre limpiar su casa o resignarse a que desde el norte le sigan prendiendo los focos rojos.

f Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy